



Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC - SALA II SECRETARÍA ÚNICA
ALVAREZ, SAMANTA LUCIANA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES

Número: EXP 5642/2020-0
CUIJ: EXP J-01-00032183-0/2020-0
Actuación Nro: 192303/2024

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que, la Sra. jueza de grado hizo lugar a la acción de amparo incoada por la Sra. Samanta Luciana Álvarez y, en consecuencia, condenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) que continuase adoptando las medidas necesarias a fin de cubrir la necesidad mínima de su vivienda, por medio del subsidio que venía otorgando hasta ahora u otro medio razonable que disponga que no sea hogar o parador, adecuado a su situación particular y por el monto necesario para satisfacer la necesidad habitacional mínima existente, tomando en consideración las pautas establecidas en el considerando VIII (v. Actuación N°1290002/2023). En ese sentido estableció que el monto del subsidio debía calcularse, en principio, a partir de los estándares establecidos en el Decreto 248/22 (o el que en futuro lo reemplace) y teniendo en cuenta que el artículo 8° de la Ley 4036 estipulaba un piso mínimo y no un máximo.

Asimismo, señaló que dicho cálculo debía adecuarse a las pautas de la Ley 4036, tomándose como referencia la canasta básica alimentaria del INDEC y siguiendo los parámetros de concreta composición del frente actor para establecer las unidades consumidoras correspondientes y, finalmente, multiplicarlas por el monto correspondiente a la canasta básica actualizada. Además, estableció que las pautas precedentemente descriptas —vinculadas con la canasta básica alimentaria del INDEC— encontrarían excepción en los casos en los que el valor que se obtuviese con la modalidad de cálculo del artículo 8° de la Ley 4036 no alcanzara el monto previsto en el Decreto 155/23 (o el que lo reemplazara en el futuro).

Para decidir de este modo, luego de establecer el marco jurídico aplicable y hacer mérito de las pruebas producidas en la causa, la magistrada de grado concluyó en que la peticionante se encontraba “... *en precarias circunstancias económicas y sociales, viéndose (...) imposibilitada de afrontar en su totalidad, en tiempo y forma, el pago del canon locativo...*” (v. página digital 20 de la actuación citada).

En otro orden, rechazó la acción promovida por el Sr. Tiziano Álvarez, en tanto no había efectuado pretensión alguna frente a la Administración que le permitiese a ésta valorar su estado de vulnerabilidad social y emitir resolución alguna al respecto (v. página digital 25 de la mentada actuación).

Finalmente, rechazó el planteo de inconstitucionalidad deducido por la parte actora respecto del límite temporal del subsidio previsto por el Decreto 690/06 y sus modificatorios e hizo lugar respecto a la limitación cuantitativa del referido subsidio.

2. Que, contra el referido pronunciamiento, apelaron la parte actora mediante la Actuación N°1388889/2023 y el GCBA por intermedio de la Actuación N°1393567/2023.

2.1. En primer lugar, el frente actor interpuso recurso de apelación a fin de que se incluyese al Sr. Tiziano Álvarez en la condena impuesta al GCBA. Sobre el punto, destacó que se debía considerar su situación como parte del grupo familiar, con un proyecto en común y no como si fuera un elemento aislado. Además, agregó que tiene un hijo menor de edad que vive con él.

Por otro lado, afirmó que la sentencia en crisis no siguió la jurisprudencia vigente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA (en adelante, TSJCABA). En ese sentido, afirmó que se afectaba la garantía de igualdad y no discriminación, ya que se desconocía la aplicación de la protección prevista en la normativa vigente respecto de los jóvenes estudiantes menores de 21 años, en cuanto a las obligaciones alimentarias debidas por sus progenitores. Agregó que su exclusión del derecho reconocido al resto de su grupo familiar no se desprendía de la Ley 4036.

Asimismo, destacó que, al hacer un análisis por separado de su situación de vulnerabilidad, se apartaba de las expresas previsiones de las 100 Reglas de Brasilia.

2.2. Por su parte, el demandado se quejó en tanto la sentencia impugnada no estableció monto ni plazo con relación a la obligación del GCBA para con la amparista. Agregó que aquella decisión excedía el objeto de la pretensión y desbordaba el contenido de los amparos, toda vez que, en materia habitacional, como el presente caso, se aplicaban los términos de la normativa vigente.

A su vez, destacó la inexistencia de acto u omisión lesiva ni de obligación jurídica incumplida que vulnerase derechos de la actora.

En otro orden, entendió que la sentencia resultaba materialmente infundada y que invadía la zona de reserva de los poderes legislativo y ejecutivo.

Asimismo, advirtió que la asistencia era de carácter transitoria y por monto determinado (conforme presupuesto) y agregó que los subsidios, paradores y albergues eran las políticas asistenciales que tenía la Ciudad.

Por su lado, se agravio por la declaración de inconstitucionalidad en cuanto al límite del monto del subsidio habitacional establecido. En ese sentido, sostuvo que no se había desvirtuado la constitucionalidad del art. 5° del Decreto 690/0 y del art. 5°, inc. d, del ANEXO I de la Resolución N° 1554/GCABA/MDSGC/08 y que se había pasado por alto que el derecho a una vivienda digna no puede ser garantizado a perpetuidad.

Finalmente, destacó que la magistrada de grado se había apartado de los criterios jurisprudenciales dictados en la materia por el TSJCABA.

2.3. Concedidos ambos recursos y ordenados los traslados correspondientes, sólo la parte actora contestó los agravios de su contraria mediante la Actuación N°1444524/2023, a cuyos términos nos remitimos en honor a la brevedad.

2.4. Recibidas las actuaciones ante esta instancia, el Sr. asesor tutelar y el Sr. fiscal, ambos ante la Cámara emitieron sus dictámenes (v. Actuaciones N°1647168/2023 y 2065071/2023, respectivamente).

2.5. Posteriormente, se presentó la parte actora y actualizó la composición de su grupo familiar y la situación de vulnerabilidad social (v. Actuación N°2066937/2023). Por otro lado, mediante Actuación N°2122196/2023, al cumplir la mayoría de edad se presentó el Sr. Zair Álvarez a estar en derecho. De dicha



CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC - SALA II SECRETARÍA UNICA
ALVAREZ, SAMANTA LUCIANA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES

Número: EXP 5642/2020-0

CUIJ: EXP J-01-00032183-0/2020-0

Actuación Nro: 192303/2024

presentación se corrió traslado a la parte demandada, la cual fue contestada por el GCBA mediante la Actuación N°2279973/2023.

2.6. Finalmente, en virtud de ello, el Sr. asesor tutelar ante la Cámara presentó un nuevo dictamen. Allí, expuso que había cesado de pleno derecho la representación respecto del Sr. Zair Álvarez y tomó intervención en representación de I.A.P., de manera complementaria a su padre, de conformidad con lo dispuesto en el art. 103 inciso a) CCyCN., y art. 57 incisos 1° y 4° de la ley 1903 (v. Actuación N°2382775/2023).

3. Que, en ese contexto, corresponde efectuar una síntesis del encuadramiento normativo en el que se encuentra inserta la cuestión a resolver.

3.1. La reforma constitucional de 1994, otorgó jerarquía constitucional a una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos, en las condiciones de su vigencia, en tanto no deroguen artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional (en adelante, CN) y que deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías, en ella reconocidos (art. 75, inc. 22).

A su vez, en el inciso 23 del artículo 75 de la CN se reforzó el mandato constitucional para la tutela de situaciones de vulnerabilidad al establecer, entre las atribuciones del Congreso nacional la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la CN y en los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Lo anterior implica que todo el aparato gubernamental debe acoger la pauta de protección especial. Ello, se funda no sólo en el texto constitucional y en la necesaria armonía en el comportamiento de los distintos órganos del Estado, sino que nuestro Alto Tribunal así lo interpretó en el considerando 8° del voto de la mayoría en el *leading case* en materia de derecho a la vivienda “Q.C., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” (Fallos 335:452), pues allí indicó que esta directiva del Congreso “*debe igualmente servir de pauta de orientación para toda autoridad estatal en su ámbito de competencia*”.

3.2. En sintonía con lo expuesto, nuestra constitución local ha venido a brindar pautas de satisfacción mínima y progresiva de los derechos sociales.

En particular, en el artículo 31 de la CCABA se establece, en lo que ahora importa, que “[l]a Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello: 1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos”.

Asimismo, no pueden dejar de tenerse en cuenta los artículos 17 y 18 en los que, en términos generales, se remarca el deber del Estado local de desarrollar políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos dirigidos prioritariamente a los sectores vulnerables.

El juego armónico de estas cláusulas ha sido interpretado por la CSJN en el considerando 10 y 11 del voto de la mayoría en el ya citado precedente “*Q.C., S.*”. Allí la Corte sostiene que los derechos sociales no son meras declaraciones sino normas jurídicas operativas con vocación de efectividad con cita de la Observación General N°4 del Comité DESC.

3.3. Por otra parte, el Poder Legislativo local sancionó un conjunto de leyes en las que se consagró una protección diferenciada a determinados grupos en estado de vulnerabilidad social.

Al respecto, se sancionó la Ley 3706 —reglamentada por los Decretos 165 y 310 ambos de 2013— cuyo objetivo fue proteger y garantizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle.

En ese entendimiento en la ley se establece que es deber del Estado garantizar, entre otras cosas, la remoción de obstáculos que impiden a las personas en riesgo o en situación de calle la plena garantía y protección de sus derechos, así como el acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario, y la orientación de la política pública hacia la promoción de la formación y el fortalecimiento de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle (art. 4°).

Posteriormente, en el año 2011, bajo la misma línea directriz, entró en vigencia la Ley 4036, en la que se definió el alcance de aquellos grupos de “*pobreza crítica*” referidos en los artículos 17 y 18 de la CCABA.

En el texto normativo se priorizó el acceso de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social y/o de emergencia a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el GCBA en el marco del reconocimiento integral de los derechos y garantías consagrados en la CN, los tratados internacionales en los que el Estado Nacional sea parte y entendiendo por situación de vulnerabilidad social, la condición de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de los derechos de los ciudadanos.

De este modo se colige que la obligación estatal de garantizar derechos cobra mayor intensidad en determinadas circunstancias y la vuelve prioritaria. Estos deberes surgen en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de que se trate.

4. Que, cabe señalar que el TSJCABA se expidió respecto de la materia que nos ocupa en la causa “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘K.M.P c/ GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCABA)’”, Expte. N°9205/12, del 21/03/14.

Varias cuestiones merecen ser mencionadas a los fines de la resolución del presente pleito.

4.1. Destacó que “*al día de la fecha no existe una ley que, cumpliendo con la manda del art. 31 de la CCABA, hubiera reglamentado el derecho a la vivienda en términos tales que se pueda conocer, con toda precisión, cuáles son las políticas públicas en materia habitacional destinadas a lograr (...) una solución (...) progresiva del déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas*



CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC - SALA II SECRETARÍA UNICA
ALVAREZ, SAMANTA LUCIANA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES

Número: EXP 5642/2020-0

CUIJ: EXP J-01-00032183-0/2020-0

Actuación Nro: 192303/2024

de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos”; ello, sin perjuicio del dictado de las Leyes 3706, 4036 y 4042.

Afirmó que la primera de ellas no reglamenta el derecho a la vivienda toda vez que, entre los deberes que pone a cargo de la Ciudad frente a las personas que se encuentran en situación de calle o en riesgo de estarlo, no previó un mecanismo para resolver su situación habitacional. Sin embargo, sí define quiénes están en situación de emergencia habitacional y dispone que la red de alojamiento nocturno no constituye un modo suficiente para atender el derecho que se consagra en el artículo 31, CCABA.

En cuanto a la segunda, destacó que su objeto es la protección integral de los derechos sociales de los “ciudadanos” de la Ciudad que pueden satisfacerse mediante tres tipos de prestaciones: económicas, técnicas y materiales. Destacó que la satisfacción y garantía del derecho a la vivienda se ubica en la determinación de estos tipos de prestaciones.

4.2. A su respecto, observó que en la citada ley se reconocen dos derechos diferentes. Por un lado, uno genérico a todos los derechos sociales que consiste en el reconocimiento de la prioridad en el acceso a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el GCBA a aquellas personas que están en estado de vulnerabilidad social y/o de emergencia (dentro de los que se encuentran los grupos familiares con niños, niñas y adolescentes, en virtud de lo dispuesto por el art. 3° de la Ley 4042).

Por el otro, el derecho a ‘un alojamiento’ a los adultos mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad social y a las personas con discapacidad que también se encuentren en tal circunstancia. En relación a éste, agregó que “...*el derecho a un alojamiento que acuerda la ley no consiste en el derecho a obtener la posesión de un inmueble. El derecho es a ser alojado (cf. los arts. 18 y 25 de la ley) (...) no es uno de propiedad, sino el de ser cobijado en las condiciones que manda la ley*”.

4.3. Sostuvo, además, que “...*el Legislador ha decidido asistir de manera, en principio, permanente a quien está en una situación de vulnerabilidad que presumiblemente se va a ir profundizando (quien es de avanzada edad, será mayor aun, y las discapacidades rara vez se curan, en todo caso se superan). En cambio, optó por darle prioridad en el acceso a las políticas sociales que el PE establezca a quienes están en una situación que puede ser caracterizada, en principio, como de vulnerabilidad ‘temporal’*” (énfasis agregado).

4.4. A esta altura del desarrollo, cabe recordar que el tribunal tiene dicho que “*las soluciones para atender el mencionado derecho a la vivienda pueden ser diversas y dependerán del ejercicio de funciones administrativas que no han sido ejercidas, más allá de los programas de subsidios habitacionales implementados por el Poder Ejecutivo para brindar un paliativo transitorio a la urgente necesidad*

habitacional (...) vale destacar que la obligación de condena impuesta en autos subsistirá mientras perdure la situación de vulnerabilidad del accionante en que ella encuentra apoyo” (TSJCABA “K.M.P”).

4.5. Determinó que —conforme la ley— el obligado a brindar las políticas sociales (entre las que se encuentra la de dar alojamiento a las personas mayores o con discapacidad) es el GCBA, es decir, se trata de funciones administrativas; circunstancia que debe ser tenida en cuenta por los jueces al resolver para no invadir competencias que el Legislador ha puesto en cabeza de otra rama de gobierno, el Ejecutivo. Ese riesgo se presenta, principalmente, en todos aquellos casos en que la Administración no ha tomado una decisión acerca de cuál es la solución que entiende corresponde adoptar frente al derecho vulnerado. En esos supuestos, luego de reconocido el derecho, corresponde darle primeramente a la Administración ocasión para que se pronuncie al respecto.

4.6. Que sentado lo anterior, corresponde destacar que cuando los programas asistenciales en materia de vivienda establecen el otorgamiento de un subsidio (vgr. Decreto 690/06), los beneficios deben ser distribuidos según prioridades contempladas en la CCBA y en los tratados internacionales, pues tales pautas impiden subsidiar al grupo menos necesitado sin subsidiar al que lo está más. A su vez, según lo expresado por el TSJCABA, como el sistema de subsidios ya citado no contempla previsiones claras que resguarden la igualdad entre iguales en el reparto y tampoco permite presumir que el régimen garantiza el subsidio a los más necesitados frente a los que lo están en menor medida, la situación de incumplimiento de la prelación constitucionalmente estipulada puede ser presumida cuando el beneficio le es denegado a una persona que se halla dentro del universo de sujetos con prioridad (conf. art. 31 de la CCBA), en “Q.C., S.”.

5. Que, cabe poner de resalto que de las constancias documentales aportadas a la causa (v. archivos adjuntos a las Actuaciones N°15778054/2020 y 2066937/2023) se desprende que el grupo familiar actor presentado en autos está compuesto por la Sra. Samanta Luciana Álvarez (41 años), sus hijos Tiziano Álvarez (19 años), Zair Álvarez (18 años), L.H.M.A. (5 años), su nuera Pilar Brunella Pesarezi (19 años) y su nieta I.A.P. (1 año —hija de Tiziano y Pilar—).

En cuanto a su situación habitacional, cabe referir que del informe social del 09/08/23 —elaborado por la Lic. en Trabajo Social, Liliana B. Rojas, de la Defensoría General de la CABA—, surge que el grupo familiar reside en un departamento en esta Ciudad, por el que abonan la suma de cincuenta y siete mil seiscientos treinta y tres pesos (\$57.633) en concepto de canon locativo y la suma cuarenta mil pesos (\$40.000) en concepto de expensas y servicios básicos. Allí, se consignó que la actora comparte habitación con dos de sus hijos y en tanto, en un entrepiso ubicado en el living, habita Tiziano junto a su pareja Pilar y su hija I.A.P.

Respecto al estado de salud, según lo informado, la Sra. Álvarez indicó presentar diabetes tipo 2 hallándose medicada. A su vez, su hija L.H.M.A. estuvo internada en el Hospital de Niños R. Gutiérrez por una neumonía necrotizante por lo que fue intervenida quirúrgicamente, encontrándose bajo diversos cuidados y tratamiento medicamentoso en miras de una nueva operación. Por otro lado, se destacó que el Sr. Tiziano Álvarez presenta secuelas en una de sus rodillas debido a un accidente.

En cuanto a la situación económica y ocupacional, la accionante hizo saber que se encontraba dedicada a la atención exclusiva de su hija y que,



CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC - SALA II SECRETARÍA UNICA
ALVAREZ, SAMANTA LUCIANA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES

Número: EXP 5642/2020-0

CUIJ: EXP J-01-00032183-0/2020-0

Actuación Nro: 192303/2024

eventualmente vende sándwiches o tortas en la Plaza Congreso. Asimismo, informó que se encuentra incluida en el programa “Ciudadanía Porteña” percibiendo la suma de cincuenta y cinco mil pesos (\$55.000) mensuales y que el padre de su hija menor le entrega dinero de modo irregular en concepto de cuota alimentaria. Por su parte, Tiziano se encuentra realizando tareas de repartidor de modo informal, teniendo ingresos inestables; mientras que Pilar no posee empleo estable dedicándose a la crianza de su hija y colaborando en la producción y venta de tortas.

Por otro lado, respecto a la situación educativa, se consignó que Zair se encuentra cursando el 5° año del nivel secundario en el Liceo N°2 turno tarde, mientras que L.H.M.A. se encuentra inscripta en sala de cuatro (4) años del jardín “5 esquinas” de esta Ciudad.

De lo dicho se advierte que el grupo familiar se halla en una situación de vulnerabilidad social que difícilmente pueda superar y que, probablemente, puede agravarse con el transcurso de tiempo.

Finalmente, no está controvertido en autos que, con los ingresos denunciados, pueda estimarse incumplido el recaudo pertinente del artículo 6° de la ley 4036, así como tampoco la configuración de los restantes recaudos de procedencia previstos en el artículo 7° de citada la ley.

6. Que el análisis fáctico y las pruebas producidas en autos dan cuenta de que el grupo familiar se encuentra en una situación de vulnerabilidad que requiere atención específica del gobierno para superar esa condición (arts. 11, 17 y 31 CCABA).

Por ser ello así corresponderá que la parte demandada le reconozca prioridad en el acceso a las prestaciones de las políticas sociales.

Además, tal como fuera reseñado anteriormente, ha quedado acreditado que Tiziano Álvarez integra el grupo familiar actor y que es parte del núcleo familiar que compone con Pilar Brunella Pesarezi y su hija en común, I.A.P.. Asimismo, se encuentra alcanzado por la ya descripta situación de vulnerabilidad social. Ello así, corresponde revocar el rechazo de la acción promovida por el Sr. Tiziano Álvarez dispuesta en la instancia de grado.

6.1. Así las cosas, si bien es cierto que en el artículo 5° del Decreto 690/06 (y sus decretos modificatorios) se fija el monto del subsidio a otorgar, no es posible perder de vista que la suma otorgada en concepto de subsidio debe ser analizada a la luz de lo establecido en la Ley de Protección Integral de los Derechos Sociales para los Ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°4036, que comprende aquellos programas, actividades y/o acciones sociales existentes y futuros.

Esta ley, en su artículo 8°, dispone: “[e]l *acceso a las prestaciones económicas de las políticas sociales* será establecido por la autoridad de aplicación

contemplando los ingresos por hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la demanda efectiva. En ningún caso podrá ser inferior a la Canasta Básica de alimentos establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o el organismo que en el futuro lo reemplace". Asimismo, toma diferentes variables para la ejecución de las políticas públicas locales, que se dirigen a considerar las circunstancias contextuales de los postulantes y beneficiarios.

En otras palabras, la canasta básica de alimentos del INDEC constituye un 'piso', aunque los montos que percibirán los postulantes de los subsidios estatales en materia de derechos sociales, tal como se desprende de la interpretación de la norma que hemos efectuado, podrán variar conforme los parámetros señalados.

Aquí es oportuno señalar que a través del Decreto 690/06 el GCBA creó el programa Atención para Familias en Situación de Calle y previó el otorgamiento de un subsidio a los fines de brindar asistencia a las familias o personas solas en situación de calle (art. 3), fijando allí una suma —que fue actualizada por los sucesivos decretos modificatorios de aquel—, que debe ser analizada a la luz de la reglamentación de aquella norma y de lo establecido en la Ley de Protección Integral de los Derechos Sociales para los Ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4036.

Así pues, dentro del esquema legal reseñado, el modo de establecer el subsidio deberá partir de los estándares fijados en el Decreto 155/23 (o el que lo reemplace). Luego éste podrá adecuarse a las pautas delineadas en la Ley 4036, tomándose como referencia la canasta básica alimentaria del INDEC —*in re*, TSJCABA en lo autos "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: [Luna, Ana Elizabeth c/ GCBA s/ Amparo](#)", Expte. N°13195/16, del 31/10/16— bajo los siguientes parámetros: 1) atender a la composición del grupo familiar; 2) determinar las unidades de referencia en que dicha composición se traduce (debiendo considerarse únicamente los parámetros asignados al sexo masculino); y, 3) calcular, según la cantidad de adultos equivalentes que representa el grupo familiar, el monto que respete la pauta de referencia fijada por el artículo 8° de la Ley 4036.

Bajo las premisas desarrolladas se logra respetar la movilidad consagrada en la Ley 4036, así como atender debidamente a las particularidades que hacen a la conformación de cada grupo familiar (<http://www.indec.gob.ar/informesdeprensa.asp> —ver Valorización Mensual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total—).

Todo ello, sin soslayar el análisis concreto de las necesidades de cada caso y la prueba producida.

Las pautas precedentemente descriptas en relación con la canasta básica INDEC encontrarán excepción en los casos en los que el valor que se obtiene con la modalidad de cálculo que remite al artículo 8° de la Ley 4036 no alcanza el monto previsto en el Decreto 155/23 (o el que lo reemplace). En estos supuestos, el derecho aquí reconocido quedaría menoscabado si se recurriese únicamente a los lineamientos previstos en el artículo 8° de la Ley 4036, es por ello que el magistrado de grado deberá analizar en concreto las necesidades de cada caso y las constancias anejadas a la causa.

Ello así, lo resuelto en la sentencia implica que el alcance del subsidio otorgado quedará sujeto a los parámetros enunciados en el presente considerando, solución que deberá subsistir mientras perduren los extremos legales y de hecho en que se apoya la condena.



CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC - SALA II SECRETARÍA ÚNICA
ALVAREZ, SAMANTA LUCIANA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES

Número: EXP 5642/2020-0

CUIJ: EXP J-01-00032183-0/2020-0

Actuación Nro: 192303/2024

7. Que, en punto al agravio referido a la invasión de la zona de reserva de la Administración, basta señalar que en autos no se ha dispuesto la adopción de medidas o la utilización de los recursos cuya selección y afectación corresponde primordialmente al Poder Legislativo y, en forma reglamentaria, al Ejecutivo. Simplemente, la intervención judicial, requerida por parte legitimada en el marco de una controversia concreta, se ha limitado a verificar que el orden de prioridades previsto en el artículo 31 y concordantes de la CCABA, se cumpla y, en su defecto, ordenar el restablecimiento de la prelación vulnerada.

Bajo esa perspectiva, cobra sentido recordar que *“es incuestionable la facultad de los tribunales de revisar los actos de los otros poderes —nacionales o locales— limitada a los casos en que se requiere ineludiblemente su ejercicio para la decisión de los juicios regularmente seguidos ante ellos”* (Fallos 320:2851). Tal es también el criterio aplicado por el TSJCABA frente a objeciones análogas (cf. “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: `Mazzaglia, Cayetano y otros c/ GCBA s/ cobro de pesos”, Expte. N°4804/06, del 13/12/06 y sus citas).

8. Que, resuelto lo anterior, corresponde revocar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 5° del Decreto 690/06 (con las reformas introducidas por los Decretos 960/08, 167/11, 239/13, 637/16, 124/17, 108/19, 148/21 y 248) en su actual redacción, habida cuenta de que, en función del marco normativo referido y del desarrollo argumental propuesto, tales decisiones —entendidas como la última ratio del orden jurídico (CSJN, Fallos: 260:153, entre muchos otros)— no resultan indispensables para hacer lugar, en los términos expuestos, a la pretensión deducida por la parte actora.

Por lo tanto, el tribunal **RESUELVE:** 1) Hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos por la demandada y por la actora y, en consecuencia, modificar la sentencia de grado en los términos aquí expuestos. 2) Imponer las costas ante esta instancia al GCBA sustancialmente vencido (conf. arts. 28 de la Ley 2145 y 64 del CCAT —texto consolidado por la Ley 6588—), sin perjuicio de destacar que la parte actora fue patrocinada por el Ministerio Público de la Defensa.

El Dr. Fernando E. Juan Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

Registro cumplido —conf. Art. 11 Res. CM 42/2017, Anexo I (reemplazado por Res. CM 19/2019)—.

Notifíquese a las partes por secretaría. Asimismo, al Ministerio Público Tutelar, por la vía correspondiente.

Oportunamente, devuélvase al juzgado de origen.



Poder Judicial
Ciudad de Buenos Aires